

El crecimiento económico de Chile nos enorgullece con justa razón. Pero el mismo hace surgir nuevos problemas de los que es necesario preocuparse para lograr un país con más igualdad de oportunidades, con más democracia, en que todos se puedan expresar, en que el cuidado por el entorno en que desarrollamos nuestras vidas sea una realidad y que éste se constituya en el mejor ecosistema para que nuestra población pueda vivir.

Paradójicamente, uno de los problemas directamente derivados de este desarrollo es que ahora hay más plata para transformar ese entorno y por lo tanto más poder para hacerlo. Tanto el sector público como el privado emprenden proyectos cada vez más grandes que producen significativas transformaciones en nuestras ciudades. Esto que parece tan bueno tiene ciertos grados de peligro.

El peligro está en que, independientemente de lo buenas que algunas de estas obras puedan ser en un determinado aspecto para el que han sido diseñadas, a veces tienen efectos colaterales que comprometen la calidad urbanística y de vida de las mismas ciudades que pretenden mejorar. La verdad es que a veces parece que hay que temerle más a las nuevas obras que mantener ciertos estados de deterioro. Esto es especialmente importante en provincia puesto que uno de los encantos de las ciudades distintas de Santiago son su mayor cercanía a la naturaleza, menores tacos de automóviles, y un ritmo más pausado que en aquella ciudad.

Disfrazados de modernidad se nos vienen los proyectos privados y aparecen grandes torres en sectores residenciales y con ellos su secuela de mayor cantidad de tráfico concentrado en calles pequeñas, grandes sombras sobre barrios residenciales y áreas verdes, y la pérdida de intimidad en las casas vecinas que quedan expuestas a las miradas desde los nuevos edificios. Esto, además de un cambio en las fachadas urbanas, de la escala de la masa del edificio frente al peatón y, en fin, una pérdida de la coherencia del paisaje urbano. Para sus moradores, un muy buen edificio, a veces con los mejores estándares. Buenos negocios para los agentes inmobiliarios. Externalidades negativas para el resto.

Por otra parte, los proyectos del sector público. Muchas veces vienen diseñados desde Santiago y ante la primera insinuación de que hay cosas que aquí en provincia no nos gustan de sus proyectos se nos argumenta que ya tiene la prefactibilidad y que no se pueden cambiar so pena de perder los fondos asignados. El resultado es que nos quedamos con magníficas carreteras para los automóviles y muy malos espacios para el peatón. Es el caso de Los Carrera, en Concepción. Un buen proyecto para trasladarse de una parte a otra de la ciudad pero un pésimo proyecto para la imagen urbana de la ciudad, una oportunidad perdida de hacer una gran calle.

Otros peligros. Resulta que aún cuando las ciudades tengan planos reguladores, los proyectos de vivienda social tienen la facultad de cambiar las densidades y otras normativas determinadas en el instrumento de planificación (que frecuentemente ha sido realizado con años de estudios por altos especialistas). Es decir de saltarse las normas y crear ghettos de pobreza bajo el argumento de que lo más importante es la vivienda. Pues se equivocan: la vivienda es importante pero más es crear ciudad y saltarse aquello que como sociedad hemos acordado atenta a la calidad de vida de todos y es antidemocrático.

La ciudad no es de quien toma la iniciativa primero, sino de todos nosotros. Se debe dar espacio para que la gente se exprese, se fomente la negociación, se dé información y se busque los medios para acoger lo que la comunidad opina sobre sus proposiciones.

Roberto Lira Olmo  
Director